

---

# Los puertorriqueños y la política en los Estados Unidos: Una evaluación preliminar <sup>1</sup>

---

**José E. Cruz**

*Departamento de Ciencias Políticas  
Universidad del Estado de Nueva York, Albany*

La historia de los latinos en los Estados Unidos se ha caracterizado por “el conflicto abierto, la desventaja económica y el prejuicio racial... Los mexicanoamericanos, los puertorriqueños y los cubanos caen bajo este esquema” (Moore y Pachon 1985:18).<sup>2</sup> Desde esta perspectiva, los mexicanoamericanos han sido objeto de atención especial en parte porque sus problemas supuestamente “reflejan los de todos los hispanos” (*ibid.*). Este es, sin duda, un esquema inadecuado para la comprensión de la política de los latinos en los Estados Unidos. Es particularmente inadecuado para el análisis de la política puertorriqueña pues no le hace justicia a la riqueza y complejidad de esa experiencia. Esta incluye los elementos arriba mencionados, pero también registra instancias de cooperación y solidaridad intergrupala, progreso social e incorporación política.

Los mexicanoamericanos son el grupo latino de mayor antigüedad en los Estados Unidos. Su experiencia, no obstante, no puede generalizarse a otros grupos. Es necesario recalcar este hecho pues muchos analistas tienden a ignorarlo.<sup>3</sup> Por ejemplo, ningún otro grupo latino ha sido objeto de “expulsiones, deportaciones, linchamientos..., guerras laborales, bandidaje organizado, expediciones filibusteras y tres guerras formales” (Moore y Pachon 1985:20). Ningún otro grupo latino ha dominado la vida política de un estado como lo hicieron los latinos de Nuevo México por tres generaciones (*ibid.*:21; González 1969). Sólo la experiencia de los puertorriqueños *en la Isla* ofrece un paralelo pero la comparación no es aceptable. En fin, una caracterización que eleva la experiencia mexicana al rango de paradigma rebasa los límites de un análisis comparativo justo y distorsiona la imagen del desarrollo político latino.

El análisis de la política de los latinos en los Estados Unidos requiere, pues, un nuevo acercamiento y una nueva síntesis basada en un marco interpretativo politemático. Dicho análisis debe identificar los factores que han contribuido a la formación de una comunidad latina a partir de la relación entre el separatismo y la acomodación como estrategias políticas dirigidas a promover una política pública responsable; el anticolonialismo y el anticomunismo como estrategias de movilización; y la politización de la etnicidad como estrategia para fomentar la incorporación política y el progreso económico. Mi argumento es que estos temas constituyen la base narrativa de un proceso de desarrollo político integracionista que apunta hacia la formación de una nueva identidad norteamericana.

### *El estudio de la política puertorriqueña en los Estados Unidos*

En el contexto de dicho marco, ¿cuáles son las características básicas del desarrollo político puertorriqueño en los Estados Unidos? ¿Qué promesa ofrece el proceso electoral? Lo que me interesa proponer en este artículo es que—con la excepción del anticomunismo—los temas arriba mencionados articulan la experiencia política de este grupo en la metrópoli. Sus actividades pueden categorizarse bajo tres renglones: incorporación, separatismo e identidad. La interacción entre estas tres vertientes ha producido un resultado importante: la representación política.

A través de los años los boricuas han ocupado el escenario político enarbolando las banderas de la incorporación, el separatismo y la identidad étnica, en busca de un *espacio permanente*, un conjunto de puntos de acceso desde los cuales satisfacer sus necesidades culturales, sociales y económicas. Hago énfasis en la permanencia para recalcar que, a pesar de la “guagua aérea” y la migración circular, es posible referirse a una comunidad estable, establecida e integrada entre los puertorriqueños en los Estados Unidos. Esta comunidad ha demostrado un interés consistente en mejorar su situación socioeconómica a través de diversas actividades. El resultado más prominente de esas actividades en términos políticos ha sido la representación electoral. Pero este planteamiento tiene un corolario negativo: aunque el proceso electoral ha contribuido al progreso de grupos previamente excluidos (Browning, Marshall y Tabb 1986), éste no ha sido el caso de los puertorriqueños (y otros latinos), por lo menos hasta el presente.

El grueso de mi argumento se nutre de dos fuentes. Para ilustrar el desarrollo político puertorriqueño me referiré a mi investigación de la comunidad puertorriqueña en la ciudad de Hartford, Connecticut. Además, en varias ocasiones haré referencia a datos estadísticos nacionales. Mis comentarios sobre la representación electoral se basan en una encuesta de funcionarios electos llevada a cabo en 1989 y 1992.

La encuesta de 1989 seleccionó estados con más de 10,000 puertorriqueños: California, Connecticut, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Virginia y Wisconsin. Casi el 80 por ciento de los puertorriqueños en Estados Unidos vivía en esos estados en 1980. Usando el *National Roster of Hispanic Elected Officials* de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials, directorios estatales y el *Who's Who in American Politics* para preparar una lista preliminar, consulté con organizaciones puertorriqueñas en cada estado para verificar la nacionalidad de los candidatos y añadir nombres. Dicha consulta se llevó a cabo por correo y por teléfono. Se seleccionaron 352 nombres para el envío de cuestionarios. Cada individuo recibió una llamada telefónica para confirmar el recibo, solicitar una pronta respuesta y referencias adicionales. Una segunda ronda de llamadas estableció contacto con los no-respondientes. En algunos casos, la compilación se llevó a cabo por teléfono. La verificación ocurrió a base de cuestionarios devueltos, llamadas telefónicas, consulta con empleados, asociados y colegas del listado y acceso a correspondencia e información publicada. La encuesta identificó funcionarios puertorriqueños en 11 de los 15 estados seleccionados. La lista de funcionarios identificados se circuló entre investigadores, líderes comunales y representantes de grupos de acción electoral para precisar la información. Con la excepción de este último paso, la encuesta de 1992 se condujo del mismo modo que la de 1989.

## *Hartford*

Toda vez que no es prudente generalizar a base de la experiencia de una ciudad, mi evaluación es, como indica el título de este artículo, preliminar. Sin embargo, la experiencia de Hartford es a la vez útil y refrescante pues ofrece un contrapunto a la tendencia de reducir la experiencia puertorriqueña en Estados Unidos a la experiencia neoyorquina. De otra parte, las encuestas brindan una imagen de

representación política que sirve de punto de referencia para especulaciones sobre la promesa del proceso electoral.

Hartford es una ciudad de tamaño mediano con unos 140,000 habitantes. Según el censo de 1990 los residentes puertorriqueños de la ciudad sumaban cerca de 40,000 ó 27 por ciento del total. En términos proporcionales, esta es la comunidad puertorriqueña más grande en los Estados Unidos. Hoy día, Nueva York se compara con sólo tres (Chicago, Los Angeles, Filadelfia) de las 21 ciudades con las concentraciones más altas de puertorriqueños, mientras que Hartford se compara con seis (Bridgeport, CT; Elizabeth, NJ; New Haven, CT; Paterson, NJ; Springfield, MA; Yonkers, NY) (véase la Tabla 1). En cuanto a la proporción puertorriqueña de la población *en una ciudad grande*, Nueva York no tiene paralelo; Hartford se compara con Bridgeport, Paterson y hasta cierto punto Springfield. Más aún, Nueva York es la única ciudad grande donde los puertorriqueños son más del 10 por ciento de la población, pero éstos rebasan esa proporción en ocho de las 10 ciudades de tamaño mediano (lugares donde la población fluctúa entre los 150,000 y 250,000 habitantes) donde se concentran. En esas 10 ciudades los puertorriqueños suman 218,158 u ocho por ciento del total en Estados Unidos.

### ***La incorporación***

En la bibliografía de las ciencias políticas el análisis de la participación electoral suele referirse a las características sociales y psicológicas de los votantes (Campbell *et al.* 1960; Verba y Nie 1972; Wolfinger y Rosenstone 1980). Un electorado compuesto por personas jóvenes, de baja escolaridad o marginadas participa en grado menor que uno compuesto por personas de mayor edad, mejor educación o mejor integradas a la sociedad. Dos escuelas de pensamiento adicionales, la teoría de la selección racional asociada con Anthony Downs (1957) y los estructuralistas (Burnham 1965; Scarbrough 1984), consideran el impacto de factores estructurales en el comportamiento político. No obstante, tan recientemente como 1993 dos analistas de la participación política todavía podían alegar, con razón, que “las teorías prevalecientes sobre la participación política americana... tienen poco que decir sobre el proceso político. Por el contrario, lo que éstas hacen es relacionar el activismo político con las características individuales de los ciudadanos” (Rosenstone y Hansen 1993:3). En el caso de los puertorriqueños, este

**TABLA 1**  
**Ciudades con alta concentración**  
**de puertorriqueños, 1990**

Estado y ciudad	Población total	PR	% del Total
<b>California</b>			
Los Angeles	3,485,398	14,367	0.4
<b>Connecticut</b>			
Bridgeport	141,686	30,250	21
Hartford	139,739	38,176	27
New Haven	130,474	13,866	11
New Britain	75,491	10,325	14
<b>Nueva York</b>			
Ciudad de N. York	7,322,564	896,763	12
Rochester	231,636	16,383	7
Yonkers	188,082	14,420	8
<b>Nueva Jersey</b>			
Camden	87,492	22,984	26
Elizabeth	110,002	12,062	11
Jersey City	228,53	30,950	14
Newark	275,221	41,545	15
Paterson	140,891	27,580	20
<b>Massachusetts</b>			
Boston	574,283	25,767	4
Lawrence	70,207	14,661	21
Springfield	156,983	23,729	15
<b>Ohio</b>			
Cleveland	505,616	17,829	4
<b>Pennsylvania</b>			
Filadelfia	1,585,577	67,857	4
Reading	78,380	11,612	15
<b>Florida</b>			
Miami	358,548	12,004	3
<b>Illinois</b>			
Chicago	2,783,726	119,866	4

Fuente: U.S. Department of Commerce, 1990 *Census of Population*.

acercamiento suele ofrecerse simultáneamente con la observación de que su interés en la política insular ha reducido su interés en la política continental (Jennings 1984:3). Dicha dinámica se ha sintetizado en la bibliografía en función de dos distinciones: la primera se refiere a diferencias entre “migrantes” y “ciudadanos” (Rogler 1972) y la segunda al dilema entre la política *de aquí* y la *de allá* (Estades 1978:8-9; Jennings 1984:139-140).

Mi investigación del desarrollo político puertorriqueño en Hartford sugiere que, contrario a lo establecido en la bibliografía, las características individuales son menos importantes para la participación política que la estructura de las opciones electorales y partidistas

disponibles a los votantes. (Para una documentación y elaboración más detallada de esta tesis, véase Cruz 1994). En Hartford, la incorporación política de los puertorriqueños fue rápida debido en gran parte al interés del Partido Demócrata en solicitar su apoyo aun cuando su fuerza electoral era pequeña. Irónicamente, el que los Demócratas dominaran la ciudad ayudó, pues en ese contexto los recién llegados de Puerto Rico tendían a sentirse como en su casa. Toda vez que los inmigrantes eran en su mayoría miembros del Partido Popular Democrático en Puerto Rico, al llegar a Hartford rápidamente se identificaban y solicitaban membresía en el Partido Demócrata, suponiendo que los dos partidos eran parecidos.

La presencia puertorriqueña en Hartford data de 1941 y su participación electoral de 1955. En 1956, cerca de 200 puertorriqueños se habían inscrito para votar, lo cual fue objeto de sorpresa para la prensa local (*The Hartford Times* 1957:7). En ese año se estimaba que vivían en la ciudad unos 2,000 boricuas, representando un aumento de 300 por ciento sobre los 500 que se estima residían allí en 1954. Suponiendo que de los 2,000 sólo un 25 por ciento cualificaba para votar, este dato indicaría un nivel de inscripción de 40 por ciento. Esta sería una proporción respetable para una comunidad en la que por lo menos el 75 por ciento eran recién llegados. Lamentablemente, los datos disponibles no permiten la formulación de una conclusión precisa. Pero la evidencia documental y testimonial sugiere un bajo nivel de inscripción y votación junto a una participación política constante.

La educación tuvo su efecto, pero no el que predice la bibliografía. Un bajo nivel de escolaridad constituía una barrera en el contexto de un requisito de alfabetización para votar, eliminado en 1976. No fue sino hasta la década de 1970 que la composición social del liderato boricua comenzó a cambiar de su trasfondo predominantemente de clase trabajadora con poca escolaridad a uno de cuello blanco, profesional y educado. Pero aun durante esos años este nuevo liderato contaba con una masa de votantes fundamentalmente pobres y poco educados. En fin, la participación política puertorriqueña en Hartford ha sido determinada más por la estructura y la dinámica del ámbito político-electoral que por las características individuales de los electores. Nuevamente, Hartford no es Estados Unidos; aun así, este hecho ha sido observado por investigadores en otras ciudades como Nueva York (Sánchez-Korrol 1983:183; Mollenkopf 1991:344; Sierra 1992:47; Hero 1992a:79).

## *El separatismo*

El separatismo como elemento organizador de la participación política puertorriqueña tiene dos vertientes: una que gira en torno al impacto de y las actitudes hacia las actividades independentistas, y otra que se expresa en función de la relación entre la política insular y los asuntos de la vida en la metrópoli.

### *El movimiento independentista*

En Hartford, los puertorriqueños adquirieron visibilidad el 2 de marzo de 1954 a raíz del ataque nacionalista al Congreso. Sus reacciones al suceso fueron mayormente negativas. Tanto en Puerto Rico como en Washington el ataque se caracterizó como un acto de "locura y salvajismo increíble" (Kihss 1954:19), "contrario a nuestras creencias y naturaleza pacífica" y como un ejemplo del "mal comportamiento de unos pocos" (*The New York Times* 1954:1). En Nueva York, el asambleísta estatal Felipe N. Torres introdujo una resolución condenando el atentado, la cual fue aprobada por la legislatura (*The New York Times* 1954a:10). En Illinois, un grupo de 21 puertorriqueños se personó en el Hines Veterans Hospital, localizado en Maywood, un suburbio de Chicago, para donar sangre como gesto de simpatía hacia los congresistas. "Queremos demostrarle al pueblo americano que el pueblo puertorriqueño no los odia," declaró Luis Martínez, un bodeguero. "Los nacionalistas no representan a nuestro país. Nosotros estamos orgullosos de ser ciudadanos americanos" (*The New York Times* 1954b:10).

El día después del tiroteo, el *Hartford Times* publicó un reportaje titulado "Local Puerto Ricans, Few in Number, Deplore Shootings" (1954:25). En él, Julio Falcón, un funcionario de enlace con los trabajadores de las fincas del tabaco, expresó su consternación ante el suceso. Según el artículo, los puertorriqueños consideraron el acto como una desgracia. Acto seguido el reportaje incluía un mensaje del jefe de bomberos de la Isla dirigido a "los jefes de bomberos de todo pueblo y ciudad en los Estados Unidos", asegurándoles que "la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño está indignada ante la increíble y criminal agresión de la cual han sido víctimas los miembros del Congreso".

Durante la década de 1970, la comunidad puertorriqueña de Hartford, como muchas otras en Estados Unidos, fue testigo de un aumento en la actividad política radical. El grupo llamado People's Liberation Party (PLP)—una versión local de los Young Lords—irrumpió en la escena política en 1970; un año después, el Partido Socialista

Puertorriqueño (PSP) comenzó sus trabajos en la ciudad. El PLP desapareció casi inmediatamente, pero el PSP se mantuvo activo por varios años. El partido organizó bien la oposición al sistema aunque nunca logró cautivar la imaginación del pueblo. A mediados de la década se dividió y desapareció. Varios años más tarde, en 1983, el grupo Los Macheteros asaltó un local de la Wells Fargo en West Hartford, robándose más de siete millones de dólares. El asalto fue perpetrado por Víctor Gerena, un puertorriqueño de segunda generación residente en Hartford pero nacido en el Bronx. Al principio, la comunidad acogió a Gerena como un Robin Hood moderno. Pero cuando el tono separatista del robo salió a relucir la simpatía se tornó en rechazo (Fernández 1987:31-33; 104).

El consenso local en torno al separatismo es afín al consenso nacional. Recientemente, muchos activistas puertorriqueños en Estados Unidos han favorecido la independencia para Puerto Rico pero la mayoría de éstos opina que la comunidad en su conjunto prefiere una relación permanente entre la Isla y Estados Unidos. Estos sentimientos están documentados en dos encuestas realizadas por el Institute for Puerto Rican Policy en 1988 y 1989. Según la encuesta de 1988, el 44 por ciento de los activistas puertorriqueños que la contestaron favorecía la independencia mientras que sólo el 14 por ciento apoyaba la estadidad y el Estado Libre Asociado (ELA). De otra parte, la encuesta de 1989 reveló que el 45 por ciento de los activistas consultados opinaba que la mayoría de los puertorriqueños residentes en Estados Unidos prefiere el ELA; el 30 por ciento opinaba que la estadidad es el status preferido y sólo el 14 por ciento pensaba lo mismo respecto a la independencia (Falcón 1993:177).

Aunque estos resultados no son definitivos, coinciden con los datos del Latino National Political Survey, los cuales revelan que la mayoría de los puertorriqueños en Estados Unidos (69.4 por ciento) prefiere al ELA como status permanente de la Isla. En contraste, el 27 por ciento apoya la estadidad y un 3.5 por ciento prefiere la independencia (de la Garza *et al.* 1992:104, 210). Más aún, en respuesta a la pregunta, "¿Cuán fuerte es su amor por los Estados Unidos?", el 31.5 por ciento contestó "extremadamente fuerte" y el 37.1 por ciento dijo "muy fuerte"; sólo el 8.1 por ciento respondió "no muy fuerte". A la pregunta, "¿Cuán orgulloso se siente de ser americano?", el 38.5 por ciento respondió "extremadamente orgulloso" y el 44.6 por ciento dijo "muy orgulloso". Una minoría de 2.3 por ciento indicó estar "no muy orgullosa" de su ciudadanía (*ibid.*:80, 201).

*La Isla vs. la metrópoli*

La relación entre la política insular y la metropolitana en Hartford es compleja pero claramente orientada hacia los asuntos continentales.<sup>4</sup> El archivo del fenecido Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en Estados Unidos contiene una referencia a 40 trabajadores del tabaco que volaron de Hartford a San Juan supuestamente para votar en las elecciones de 1960 (Department of Puerto Rican Community Affairs 1960: Box 32).<sup>5</sup> Este dato contrasta con la actitud de la comunidad puertorriqueña urbana. Los boricuas de la ciudad ni siquiera consideraron la posibilidad de votar en ausencia (aunque algunos organizaron clubes de comerieños y juanadiences ausentes cuyo propósito era social); muchos visitaban la Isla pero más por placer que por interés en la política insular. El interés de la masa boricua en la política de Hartford ha sido menor que el del liderato, pero ese alejamiento relativo nunca fue dictado por una preocupación exclusiva con los problemas de la Isla.

En 1986, un grupo de acción política prominente, el Puerto Rican Political Action Committee of Connecticut, decidió condenar como una violación de derechos civiles el arresto en Puerto Rico de los Macheteros asociados con el robo de 1983. Pero en la comunidad este caso no logró mover a los puertorriqueños más allá de muestras esporádicas de solidaridad. La campaña de los socialistas locales—ahora sin partido—y sus aliados para lograr la excarcelación de los acusados y propagar la discusión del caso colonial de Puerto Rico fue insignificante.

Cuando el debate de 1989-90 sobre el propuesto plebiscito planteó la posible participación de los puertorriqueños en la metrópoli, el consenso comunal fue positivo. En un foro en Nueva York, un líder local—Edwin Vargas, Jr.—argumentó a favor del voto a nombre del National Congress for Puerto Rican Rights, cuyo interés programático en el status de Puerto Rico se enmarca dentro de una agenda predominantemente metropolitana. Aun así, Vargas, cuya experiencia política está anclada en la política de Hartford, comenzó su presentación lamentando la controversia y sugiriendo que ésta, una vez más, “amenazaba la unidad de la comunidad”. Acto seguido, Vargas sugirió que el debate sería efímero (Institute for Puerto Rican Policy 1993:23). La idea del plebiscito fue forzada en el Congreso por el liderato isleño y una vez el Congreso engavetó la iniciativa, el interés en la diáspora se desvaneció. A lo largo del debate los boricuas de Hartford se mantuvieron atentos a los asuntos de la vida cotidiana; a nivel nacional la elite puertorriqueña mantuvo fija su atención fundamentalmente en los asuntos continentales.

En Washington, D.C., a principios de 1990, la legislación relativa al SIDA y las zonas empresariales captó la atención de la National Puerto Rican Coalition (*NPRC Reports* 1990:5). En abril el grupo esbozó un programa de cabildeo dirigido a la sesión centésimoprimera del Congreso que incluyó asuntos como el desarrollo económico comunitario, la reforma del sistema de bienestar público, los derechos civiles, el censo de 1990, el proceso presupuestario federal y la pobreza persistente (*NPRC Reports* 1990a:1). Excepto por la oposición del grupo a recortes al programa de asistencia nutricional para Puerto Rico (*NPRC Reports* 1990b:1), el año estuvo dominado por problemas metropolitanos. Durante el último trimestre de 1990 la preocupación fundamental del grupo fue la legislación llamada Community Housing Partnership Act (*NPRC Reports* 1990c:4) y el desarrollo de una red de expertos en desarrollo económico comunitario (*NPRC Reports*: 1990d:1).

### *La identidad*

El caso de Hartford sugiere que, a pesar de que la distinción entre “migrantes” y “ciudadanos” es adecuada en cuanto a las diferencias entre residentes urbanos y trabajadores agrícolas, ésta no capta la transición actitudinal e ideológica que define el desarrollo político puertorriqueño. Esto es así debido a que los obstáculos confrontados por los boricuas en los Estados Unidos han sido más políticos que sociológicos. Además, la distinción no recoge la experiencia de los puertorriqueños de segunda generación que carecen de la experiencia insular y agrícola.<sup>6</sup> Más adecuada resulta la distinción entre conciencia étnica y conciencia del poder. La relación entre estos dos modos de ser y actuar define la identidad comunal y la política puertorriqueña.

En Hartford, la conciencia étnica ha sido una expresión de otredad. Según la expresión de un líder de la comunidad: “La comunidad de Hartford debe entender a los puertorriqueños como puertorriqueños... Sí, somos americanos, pero no lo parecemos. Los americanos deben prestarle atención a lo que el puertorriqueño tiene que ofrecer” (Ryan 1965:1). De otra parte, la conciencia del poder se refiere a la cristalización de una actitud: “De ahora en adelante—declaró otro líder a raíz de dos revueltas comunales en 1969—vamos a demostrarle a todo el mundo que no sólo estamos aquí, sino que deseamos mejoras... Nuestro plan es mejorar y adelantar al concepto del puertorriqueño a través del estado” (*The Hartford Times* 1969:2B).

La relación entre conciencia étnica y conciencia del poder se ha manifestado en un proceso histórico a la vez expresivo y racional.

La expresividad se considera la característica definitiva de los movimientos sociales orientados hacia la identidad. La racionalidad instrumental se asocia con movimientos sociales cuya estrategia es la movilización de recursos (Cohen 1985). Aunque los puertorriqueños no constituyen un movimiento social, los corolarios mencionados—expresividad y racionalidad—parecen aplicables a su caso. En éste la distinción entre identidad y movilización de recursos resulta problemática pues la identidad ha sido un recurso movilizable. El desfile puertorriqueño del estado de Connecticut, organizado en Hartford en 1964, ha sido una expresión de la conciencia étnica y a la vez del poder, pues los puertorriqueños lo han utilizado para inscribir votantes.

La conciencia étnica y la del poder, sin embargo, no siempre han ido de la mano. Por ejemplo, las formas primarias de asociación, durante la década de 1950, fueron mayormente religiosas y culturales. Ejemplos de esta tendencia incluyen la Legión de María y el Rosario Cantado, organización y actividad, respectivamente, que estableció Olga Mele, probablemente la primera puertorriqueña en mudarse a Hartford en 1941. Anteriormente mencioné los clubes de compueblanos ausentes cuyo propósito era exclusivamente social. Además, al principio algunos puertorriqueños organizaron ligas de béisbol y más tarde festivales culturales cuyo divorcio de la política era deliberado.

No obstante, y esta es otra razón por la que la distinción entre identidad y movilización de recursos es problemática, estas formas de asociación han sido políticamente útiles en sí mismas. Al promover el contacto social éstas proporcionaron tres recursos esenciales para el desarrollo de la conciencia del poder: un foro comunal, experiencia organizativa y una red de contactos formales entre líderes y masa.

La identidad comunal puertorriqueña en Hartford ha cuajado a través de la cultura y el lenguaje; la identidad política se ha definido a base de la falta de representación. La primera se ha utilizado para transformar la segunda. Campañas para nombrar escuelas locales en honor a próceres puertorriqueños, celebrar el Día de Reyes y establecer programas de educación bilingüe han sido vehículos de afirmación étnica dirigidos a lograr representación electoral. Por ejemplo, la lucha por la educación bilingüe estuvo asociada a la lucha por elegir a una puertorriqueña, María Sánchez, a la junta de educación. En efecto, la etnicidad ha sido una manera de buscar apoyo para candidatos electorales. Por ejemplo, cuando los candidatos puertorriqueños aparecen en la lista B de la papeleta electoral el lema de la campaña suele ser "Vota por la B de Boricua."

## *La representación electoral*

Usando el ejemplo de Hartford, he sugerido que la dinámica central de la política puertorriqueña en Estados Unidos gira en torno a los impulsos complementarios de la incorporación, el separatismo y la identidad. El resultado concreto de ese proceso de choque y convergencia ha sido la representación electoral. No es una exageración afirmar que todos los caminos de la participación política puertorriqueña en la metrópoli conducen a ese ámbito. En Hartford, esto es así incluso entre los grupos de izquierda (véase Cruz 1995c). Este punto nos devuelve a una de nuestras preguntas iniciales: ¿Cuál es la promesa de ese proceso? Aquí miramos no sólo a Hartford sino a la escena nacional.

Entre 1989 y 1992, la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos demostró gran vigor político en varios niveles. El resultado más notable de ese vigor fue la elección al Congreso de dos puertorriqueños, para representar distritos en Illinois y Nueva York. Dos instancias adicionales de intensa participación política fueron la reforma constitucional en la ciudad de Nueva York y la revisión de distritos congresionales ("redistricting") en el nordeste.

Varias campañas locales también produjeron resultados importantes. Volviendo a Hartford, los puertorriqueños capturaron tres de los cinco votos de la coalición que dominó el gobierno local durante el término de 1991-93. En 1992, en la ciudad de Nueva York, el 16 por ciento de los escaños en el consejo municipal fueron ocupados por puertorriqueños a pesar de que la población boricua era en ese momento sólo un 12 por ciento del total.

A nivel nacional, no obstante, el hecho cardinal relativo a la participación electoral puertorriqueña tanto en 1989 como en 1992 lo fue la subrepresentación. En 1983, tres estados con poblaciones puertorriqueñas significativas—Illinois, Nueva Jersey y Nueva York—tenían seis distritos congresionales con poblaciones latinas que constituían entre un 26 y un 51 por ciento del total. Este hecho se consideraba favorable para la elección de un candidato étnico, posiblemente un puertorriqueño (Pachon 1983:20). Seis años más tarde, sin embargo, esto no había ocurrido.

### *Primera encuesta, 1989*

La encuesta de 1989 identificó a 123 funcionarios de origen puertorriqueño electos en 11 estados con poblaciones boricuas de más de 10,000 habitantes: California, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio

y Pennsylvania. El 74 por ciento de los puertorriqueños en Estados Unidos vivía en esos estados en 1980; por lo tanto resulta razonable comparar su representación con el número de funcionarios electos. Entonces los puertorriqueños constituían el uno por ciento de la población pero menos de una décima del uno por ciento de todos los funcionarios electos. En los estados mencionados, los puertorriqueños eran el 1.6 por ciento de la población total comparado con menos de una décima del uno por ciento de todos los funcionarios electos.

Los puertorriqueños estaban subrepresentados en relación con los latinos. En los estados de la encuesta los boricuas constituían el 21 por ciento de los latinos comparado con el 17 por ciento de los funcionarios electos de origen hispano. En los estados con las mayores concentraciones de puertorriqueños la comparación fue más favorable. En Connecticut, el 71 por ciento de la población latina era puertorriqueño pero los puertorriqueños eran el 99 por ciento de los funcionarios latinos electos. En Nueva Jersey, la comparación era de 50 contra 60 por ciento respectivamente. En Nueva York, con el 59 por ciento de los latinos, los puertorriqueños constituían el 79 por ciento de los latinos en puestos electivos. Aun así, la proporción boricua de la población total de esos tres estados era de 4.4 por ciento mientras que la proporción de los funcionarios electos era de menos de la mitad del uno por ciento.

### *Segunda encuesta, 1992*

La revisión de distritos congresionales basada en el censo de 1990 contribuyó al aumento en la representación electoral de los puertorriqueños en Estados Unidos pero el aumento agregado no fue lo suficientemente amplio como para obtener paridad. Por paridad entiéndase igualdad en términos proporcionales, no absolutos. En 1992, nuestra encuesta identificó 143 funcionarios de origen puertorriqueño electos en los 11 estados originales, lo cual constituye un aumento de 16.2 por ciento.

Según el censo de 1990, el 90 por ciento de los boricuas en Estados Unidos vive en los 11 estados de la encuesta. En 1992, los funcionarios de origen puertorriqueño electos seguían siendo menos de una décima del uno por ciento de todos los funcionarios electos en el país mientras que su proporción de la población total excedió por primera vez el uno por ciento. En los estados examinados, las proporciones eran de menos de una décima del uno por ciento y dos por ciento respectivamente.

**TABLA 2**  
**Funcionarios puertorriqueños electos**  
**como porcentaje del total de funcionarios electos**

Estado	Tota	PR	%	% PR de Pob.
California	19,279	3	*	+
Connecticut	9,929	15	*	4
Florida	5,368	2	*	2
Illinois	38,936	8	*	1.2
Indiana	11,355	2	*	+
Massachusetts	13,888	4	*	2.4
Michigan	19,292	1	*	+
Nueva Jersey	9,345	25	*	4
Nueva York	26,343	71	*	6
Ohio	19,750	5	*	+
Pennsylvania	33,242	7	*	1.2
Total	206,737	143	*	2
EEUU	504,404	143	*	1.1
Funcionarios federales	540	4 <sup>a</sup>	+	

**Fuentes:** José E. Cruz, encuesta de funcionarios electos, 1992; U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, *Popularly Elected Officials in 1987*, Preliminary Report, GC87-2(P), December 1988.

\*Menos de una décima de uno por ciento.

+Menos de uno por ciento.

<sup>a</sup>Incluye al Comisionado Residente en Washington.

En 1989, con relación a los latinos, el margen de subrepresentación puertorriqueña en los once estados era de cuatro puntos porcentuales. En 1992, el margen se redujo levemente con un aumento en la proporción boricua de los latinos a 17.5 por ciento y en la proporción boricua de latinos electos a 8.2 por ciento. Este aumento se debió, en parte, a la adición de consejales escolares en Chicago entre los representantes latinos en Illinois.

Nuevamente, en los estados de mayor concentración puertorriqueña el contraste es más favorable. En Connecticut los puertorriqueños eran el 69 por ciento de los latinos pero el 100 por ciento de los latinos electos en 1992. En Nueva Jersey las proporciones respectivas eran de 42 y 63 por ciento. En Nueva York los puertorriqueños eran el 49 por ciento de los latinos comparado con el 78 por ciento de los latinos electos. La Tabla 3 resume estas correlaciones.

La Tabla 4, sin embargo, demuestra que el margen de sobrerrepresentación en Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York se debe en parte a una reducción en la proporción boricua de los latinos en esos estados.

**TABLA 3**  
**Funcionarios puertorriqueños electos (FPE)**  
**como porcentaje de funcionarios hispanos electos (FHE)**

Estado	FHE	FPE	%	% PR de Pobl. Hispana
California	682	3	+	1.7
Connecticut	15	15	100	69
Florida	66	2	3	16
Illinois	796	8	1	17
Indiana	7	2	29	14
Massachusetts	4	4	100	53
Michigan	11	1	9	9
Nueva Jersey	40	25	63	42
Nueva York	91	71	78	49
Ohio	8	5	56	3.5
Pennsylvania	9	7	78	65
<i>Total</i>	1,730	143	8.2	17.5

**Fuentes:** José E. Cruz, encuesta de funcionarios electos, 1992; U.S. Department of Commerce, *1990 Census of Population*; NALEO, *1992 National Roster of Hispanic Elected Officials*. En este *Roster* la cifra para Illinois incluye 754 consejales escolares en el área de Chicago. Estos son reconocidos como funcionarios electos por el Census of Governments del U.S. Census Bureau.

+ Menos de uno por ciento.

En Nueva Jersey el margen de sobrerrepresentación aumentó por 11 puntos a pesar de que la representación disminuyó. En Connecticut el margen aumentó un poco conjuntamente con el nivel de representación. Pero en Nueva York, se redujo la proporción boricua de la población latina al mismo tiempo que aumentaron el número de funcionarios electos y el margen de sobrerrepresentación.

**TABLA 4**  
**Puertorriqueños como porcentaje de hispanos y funcionarios puertorriqueños electos (FPE) como porcentaje de funcionarios hispanos electos (FHE) en estados con grandes concentraciones de puertorriqueños**

Estado	1989			1992		
	% de Hisp	%	Margen	% de Hisp	%	Margen
Connecticut	71	99	+28	69	100	+31
Nueva Jersey	50	60	+10	42	63	+21
Nueva York	59	79	+20	49	78	+29

**Fuentes:** José E. Cruz, encuesta de funcionarios electos, 1989 y 1992; National Puerto Rican Coalition, *Puerto Ricans in the U.S. Mainland: A Special Report Based on the 1990 Decennial Census* (junio de 1992).

En términos absolutos el balance del período 1989-1992 es positivo. No obstante, la representación en Indiana se redujo en 50 por ciento y Nueva Jersey perdió un representante. Florida, cuya población puertorriqueña creció en un 158.6 por ciento durante la década de 1980, no registró aumento alguno en representación. En Massachusetts la población puertorriqueña registró un crecimiento de 102 por ciento y además ganó un representante. Este balance, sin embargo, oscurece que la representación estatal en Massachusetts se perdió. California, Connecticut y Ohio registraron ganancias netas pero el estado con el mayor aumento fue Nueva York con una ganancia de 31.4 por ciento. La Tabla 5 resume los cambios entre 1989 y 1992 por estado.

**TABLA 5**  
**Funcionarios puertorriqueños electos por estado,**  
**1989/1992**

Estado	1989	1992	Cambio
California	1	3	+2
Connecticut	14	15	+1
Florida	2	2	-
Illinois	8	8	-
Indiana	5	2	-3
Massachusetts	3	4	+1
Michigan	1	1	-
Nueva Jersey	26	25	-1
Nueva York	54	71	+17
Ohio	2	5	+3
Pennsylvania	7	7	-
<i>Totales</i>	123	143	+20

**Fuente:** José E. Cruz, encuesta de funcionarios electos, 1989 y 1992.

A nivel federal la representación puertorriqueña se triplicó. Contando al Comisionado Residente de la Isla, los boricuas son el 24 por ciento de los latinos en la Cámara de Representantes (cuatro de 17). Los puertorriqueños de la Isla y el continente constituyen el 24 por ciento de los latinos en los Estados Unidos. Si se excluye al Comisionado Residente, la proporción se reduce a 17.6 por ciento, cifra que sobrepasa la paridad pues los puertorriqueños del continente son el 12.2 por ciento de los 22.4 millones de latinos enumerados por el censo de 1990. A comienzos de la década de 1990, la representación puertorriqueña en el Congreso se situó un poco más cerca de la paridad al moverse de menos de la mitad del uno por ciento en 1989 a 0.7 por ciento en 1992.

## *La promesa de la representación electoral*

Si, como sugiere la experiencia de Hartford, todos los caminos de la participación política conducen al ámbito representativo-electoral, ¿qué deben hacer los funcionarios puertorriqueños electos para promover el bienestar socioeconómico de la comunidad puertorriqueña? En otras palabras, ¿cuáles son los elementos básicos de una estrategia de progreso puertorriqueño en el plano del Estado?

El censo de 1990 demuestra que el desempeño de los puertorriqueños en el mercado laboral y otros índices socioeconómicos durante la década de 1980 fue mixto, caracterizado simultáneamente por progreso y estancamiento. Esta situación fue el resultado de factores combinados tales como crecimiento económico, diferencias en economías regionales, características de capital humano y condición migratoria (Rivera-Batiz y Santiago 1994). Entre 1979 y 1989 el ingreso promedio anual de los hogares puertorriqueños aumentó en un 25 por ciento, de \$23,463 a \$29,264. De igual modo, el ingreso promedio per cápita de los hogares puertorriqueños aumentó en un 29 por ciento de \$6,490 a \$8,370; el margen entre el ingreso total y per cápita fue el resultado de reducciones en el tamaño promedio de los hogares (*ibid.*:26). De otra parte, la desigualdad entre el ingreso de los puertorriqueños y los blancos no-hispanos se mantuvo muy alta, con una diferencia de casi 50 por ciento: por cada dólar ganado por un blanco no-hispano en 1989 un puertorriqueño se ganó \$0.53. De 1980 a 1990 la tasa de pobreza entre personas de origen puertorriqueño se redujo de 36.4 a 30.3 por ciento, pero aun así constituyó el doble de la tasa para la población total, registrando seis puntos porcentuales por encima de la tasa para los hispanos (*ibid.*:33, 41).

Esta situación puede interpretarse de la siguiente manera: si la política pública no singulariza las necesidades de los puertorriqueños, algunos lograrán, no obstante, aumentar sus ingresos y salir de la pobreza como consecuencia de un mejor clima económico y ganancias de capital humano; otros se mantendrán al final de la fila socioeconómica y continuarán sufriendo. En efecto, las reducciones en la tasa de pobreza se asocian con reducciones en el desempleo y éstas a su vez con cambios en la estructura ocupacional y el nivel de escolaridad. Esto es cierto en el caso de los puertorriqueños en Estados Unidos, quienes durante el período de marzo de 1986 a marzo de 1989 experimentaron reducciones en su nivel de desempleo debido a cambios en su distribución ocupacional—de cuello azul a cuello blanco—y aumentos en escolaridad. Conjuntamente, la proporción de familias puertorriqueñas con ingresos por debajo del nivel

de la pobreza se redujo de 40.6 por ciento en 1985 a 30.8 por ciento en 1988 (*NPRC Reports* 1990e:1).

Lo que esto significa en cuanto a una estrategia política en el plano del Estado es que los funcionarios electos puertorriqueños deben promover dos tipos de iniciativas legislativas: un tipo debe fomentar el crecimiento económico y el otro crear las condiciones que permitan el beneficio individual, pero masivo, de la participación en el mercado de trabajo. La dificultad de este acercamiento en el contexto presente es avasalladora: las elecciones congresionales de 1994 han culminado en un realineamiento partidista que hará difícil, si no imposible, cualquier medida redistributiva no dirigida hacia el aparato militar, el sector corporativo o individuos de altos ingresos.

El segundo punto de esta posible estrategia tiene que ver con las circunstancias que enmarcan la representación. La encuesta de 1992 revela que los funcionarios electos puertorriqueños no representan a una comunidad homogénea. Casi la mitad representa a electores que son más de un 50 por ciento latino, y de esta proporción el 52 por ciento representa electores que son más de un 50 por ciento puertorriqueño. Sólo el 30 por ciento representa a votantes que son más de un 50 por ciento blancos no-hispanos y una minoría de nueve por ciento representa a electores que son más de un 50 por ciento afroamericano. Casi una tercera parte representa a electores que son entre un 20 y un 40 por ciento blancos no-hispanos y el 63 por ciento está obligado a responder a los reclamos de electores que son entre un 20 y un 40 por ciento afroamericano. Estos datos apuntan hacia una dificultad importante: la diversidad del público para quien se legisla complica la tarea, tiende a diluir el contenido de la política pública y puede paralizar la empresa.

Lo anterior sugiere que la promesa de la representación política es falsa. Sin embargo, tres razones apuntan hacia una conclusión diferente. En primer lugar, la política electoral cuenta. Cuando la cara del poder cambia, la política pública cambia también. El resultado de la elección congresional de 1994 es la versión perversa de esta realidad pero como esa misma elección indica, la política estadounidense no es inmune al cambio. La mera representación no basta, como lo confirma la experiencia puertorriqueña tanto local como nacional. Para que sea exitosa, la representación requiere cierto tipo de liderazgo y contexto. Los líderes deben ser honestos, comprometidos, enérgicos, inteligentes y hábiles (Carbone 1980:220). Los electores representados deben ser una comunidad demográficamente fuerte. Como mínimo, el acceso a los cuerpos de gobierno debe traducirse en influencia y, en términos óptimos,

*Para ser efectivos, los puertorriqueños en  
posiciones de influencia y liderato deben  
desarrollar lazos colaborativos con grupos  
de poder dentro y fuera del Estado.*

---

entrañar control de estructuras decisionales importantes. Finalmente, la opinión pública debe favorecer la dirección que la política pública desea seguir. A nivel local ese apoyo tiene que venir acompañado de respaldo estatal y federal (Browning *et al.* 1986:52, 250-253). Aunque ésta es una combinación ambiciosa y compleja de circunstancias, constituye un esquema realista de lo que requiere el éxito.

En segundo lugar, el sistema político norteamericano es relativamente abierto. Esto hace posible que los marginados de hoy sean los protagonistas de mañana. Esto es importante a pesar del alegato de que la política pública está dominada no por representantes electos sino por grupos de interés. Si esto fuese cierto, el corolario lógico sería que la representación política no es necesaria. Según esta lógica, el Estado viene a ser simplemente el comité ejecutivo del grupo mejor organizado. Pero el alegato no es cierto. El sistema de grupos de interés en Estados Unidos se ha caracterizado como uno con un "acento de clase alta" (Schattschneider 1960:33) muy definido. Esto ha contribuido a una imagen en la que la homogeneidad de estructura, intereses, objetivos y efectividad del sistema de grupos de interés no cuadra con la realidad. El sistema es, en efecto, "conflictivo, permeable [e] impredecible" (Gais *et al.* 1991:125) y distintos grupos exhiben distintos grados de éxito. En Washington, ningún grupo es capaz de controlar la agenda de política pública (Heinz *et al.* 1993:369) y a nivel local, incluso en lugares donde corporaciones poderosas ejercen gran influencia, su hegemonía no puede darse por sentada (Cruz 1991; Jones y Bachelor 1993). Dicha agenda no es immune a las presiones externas pero su control radica usualmente en manos de funcionarios electos. Si éste no fuese el caso, los grupos de interés no serían necesarios; pero sí lo es y, más importante aún, el acceso a cargos públicos no está cerrado a los puertorriqueños.

En tercer lugar, la política pública cuenta. Cuando Ronald Reagan afirmó que en la década de 1960 el gobierno federal le declaró la guerra a la pobreza y la pobreza ganó, pretendía elaborar un argumento

contra la intervención del gobierno en la economía y la sociedad civil. Las palabras de Reagan fueron un eco tergiversado de uno de los temas del liberalismo de la administración de John F. Kennedy: "No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país". Pero el corolario de esta pregunta es: ¿quién debe abstenerse de pedirle favores al gobierno? ¿Los intereses automovilísticos y de la construcción que se beneficiaron del sistema inter estatal de carreteras? ¿Los propietarios de vivienda que se benefician de la deducción por pago de intereses hipotecarios? ¿Los veteranos que obtuvieron un grado universitario gracias al llamado GI Bill? Sin duda, estos sectores de la población se beneficiaron de la política pública. A muy pocos les han prohibido presentar demandas al Estado y nadie, tanto en la bibliografía académica como en la popular, ha sugerido que la intervención del gobierno estaba destinada a fracasar en el servicio de sus intereses.

### *Conclusión*

A principios de la década de 1990, los puertorriqueños aprovecharon la oportunidad ofrecida por el prorrateo ("apportionment") y la revisión de distritos congresionales para aumentar su representación electoral. Los detalles de este proceso aguardan una elaboración completa. La versión corta de esta historia política reciente está en el resultado: el aumento de uno a tres congresistas puertorriqueños. Otras estrategias, viejas y nuevas, son necesarias. Para empezar, debe promoverse la aplicación fiel de la Ley de Derechos Electorales ("Voting Rights Act") (para un análisis de los recientes ataques a la ley véase Cartagena [1995]). Más puertorriqueños deben competir en el proceso electoral y muchos más hacer uso del voto. Como he señalado, los puertorriqueños que ya ocupan posiciones públicas deben promover políticas públicas que amplíen la capacidad del mercado de trabajo y faciliten la incorporación de los puertorriqueños a los mejores renglones de ese mercado. Esto no va a ser fácil pero, dadas las tres características del sistema enumeradas arriba, tampoco será imposible. Tanto los puertorriqueños que aspiren a posiciones de poder como aquellos que tienen acceso a éstas, tendrán que prestarle atención especial a construir coaliciones políticas con blancos no-hispanos, africanoamericanos y otros latinos. Hay precedentes para esto en Massachusetts y Connecticut, cuyas experiencias han comenzado a analizarse (véase Hardy-Fanta 1993:108-110; Cruz 1994:264-277).

El reto principal consiste en acceder al poder mediante la penetración del Estado en el contexto de una población pequeña, la

ascendencia del "universalismo" y la devolución de responsabilidades (del gobierno federal a los estados) en la política pública, la crisis fiscal y una economía cambiante. Según nuestra encuesta, los funcionarios puertorriqueños electos han identificado correctamente los asuntos de política pública de mayor importancia para la comunidad puertorriqueña: la educación, la vivienda, el desarrollo económico comunitario, la salud, la criminalidad y los derechos civiles. Pero las razones específicas por las que esa agenda no se ha traducido en una mejoría sustancial en las condiciones de vida de la comunidad no son del todo claras. Si el problema es estructural (e.g., desindustrialización, economías regionales en deterioro), político (e.g., universalismo, debilidades de la política de coaliciones, el nuevo federalismo, la crisis fiscal), de liderato (e.g., representantes con poca experiencia, mediocres, deshonestos o aislados) o si obedece a una combinación de estos u otros factores, aún no lo sabemos.

Pero varias prescripciones generales, inducidas en parte de la experiencia de Hartford, son apropiadas. Para ser efectivos, los puertorriqueños en posiciones de influencia y liderato deben desarrollar lazos colaborativos con grupos de poder dentro y fuera del Estado (Mollenkopf 1992:5). Para lograr esta cooperación los líderes no pueden permitir que las instituciones públicas enajenen al electorado (Cruz 1994:72-75). Asimismo, es importante que en la defensa de los intereses de las masas no se demonice al sector privado.

Hace más de dos milenios Aristóteles se pronunció con respecto al poder pluralista. En *La política*, escribió: "Supongamos la presencia de todos estos en la misma ciudad—los moralmente virtuosos, los ricos y bien nacidos, y la masa de ciudadanos—¿habrá o no disputas con respecto a quién debe gobernar? ...debemos preguntarnos cómo decidir quién gobierna cuando todos estos sectores coexisten" (1982, III-xiii: 211-212). Demás está decir que el filósofo griego no llegó a una conclusión duradera. No obstante, al declarar que "el estado es una pluralidad que depende de la educación para encontrar su unidad" (1982, II-v: 116), Aristóteles sugirió que para resolver la disputa arriba mencionada, no necesita sacrificarse la integridad de los grupos e intereses involucrados. Algunos intereses son indefendibles; pero la sugerencia aristotélica debe atenderse, reconociendo que, sin la cooperación de varios grupos de poder en la sociedad norteamericana, es poco probable que los puertorriqueños puedan legislar e implementar las iniciativas de política pública que hacen falta.

## NOTAS

1. Este artículo es una versión revisada de un ensayo publicado en el *New England Journal of Public Policy* (Cruz 1995b). Agradezco los comentarios de Carlos Santiago, Todd Swanstrom y un evaluador anónimo de la *Revista de Ciencias Sociales*.
2. Todas las citas del inglés han sido traducidas por el autor.
3. El más reciente ejemplo de esta tendencia es el libro de Rodney Hero, *Latinos and the U.S. Political System: Two-Tiered Pluralism* (1992). Véase mi reseña, "In Search of Latino Politics" (Cruz 1995a).
4. El debate dentro de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos en 1989-90 en torno al propuesto plebiscito mostró una compleja zona intermedia entre estos dos puntos de referencia (véase Meléndez y Meléndez 1993:1-16; Falcón 1993:176-180; Institute for Puerto Rican Policy 1993).
5. En el verano de 1995 esta colección estaba en vías de localizarse en el Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, City University of New York.
6. Alfredo López percibe la importancia de este hecho pero exagera su significado al plantear que durante la década de 1970 los boricuas nacidos en el continente descubrieron que eran un grupo sin cultura y sin historia. López confunde la desorientación y el cambio con el vacío (López 1973:160-164).

## REFERENCIAS

- Aristóteles. (1982). *The Politics*. Sinclair, T.A., traducción, Saunders, Trevor J., revisión. Nueva York: Penguin Books.
- Browning, Rufus P., Dale Rogers Marshall y David H. Tabb. (1986). *Protest is not Enough: The Struggle of Blacks and Hispanics for Equality in Urban Politics*. Berkeley: University of California Press.
- Burnham, Walter Dean. (1965). The Changing Shape of the American Voter. *American Political Science Review* 59:7-28.
- Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes. (1960). *The American Voter*. Nueva York: Wiley.
- Carbone, Nicholas. (1980). The General Assembly's Failure to Help its Capitol City. En *Perspectives of a State Legislature*, 2a. ed., editado por Clyde D. McKee, Jr., pp. 213-222. Hartford: n.p.
- Cartagena, Juan. (1995). Puerto Ricans and the Voting Rights Act. *Crítica* (Institute for Puerto Rican Policy, Nueva York) 14 (julio):1, 6-9.
- Cohen, Jean L. (1985). Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements. *Social Research* 52, 4 (invierno):663-716.
- Cruz, José E. (1995a). In Search of Latino Politics. *The Latino Review of Books* 1, 1 (primavera):40-42.
- Cruz, José E. (1995b). Puerto Rican Politics in the United States: A Preliminary Assessment. *New England Journal of Public Policy* 11:1 (en prensa).
- Cruz, José E. (1995c). Pushing Left to Get to the Center: Notes on Puerto Rican Radicalism in Hartford, Connecticut. Manuscrito inédito.
- Cruz, José E. (1994). *Consequences of Interest Group Political Mobilization: A Case Study of the Puerto Rican Political Action Committee (PRPAC) of Connecticut*. Tesis doctoral, Graduate Center, City University of New York.
- Cruz, José E. (1991). Regime Changes in Hartford. *NPRC Reports* 11:9 (noviembre, Washington, D.C.).
- de la Garza, Rodolfo O., Louis DeSipio, F. Chris García, John García y Angelo Falcón. (1992). *Latino Voices*. Boulder, CO: Westview Press.
- Department of Puerto Rican Community Affairs, Commonwealth of Puerto Rico. (1960). *Inter-Office Report from Gilberto Camacho to Eulalio Torres*, 15 de noviembre, Nueva York, Archival Collection, Box 32.
- Downs, Anthony. (1957). *Economic Theory of Democracy*. Nueva York: Harper and Row.
- Estades, Rosa. (1978). *Patterns of Political Participation of Puerto Ricans in New York City*. Río Piedras, PR: Editorial Universitaria.
- Falcón, Angelo. (1993). A Divided Nation: The Puerto Rican Diaspora in the United States and the Proposed Referendum. En *Colonial Dilemma*, editado por Edwin Meléndez y Egardo Meléndez, pp. 173-180. Boston: South End Press.
- Fernández, Ronald. (1987). *Los Macheteros*. Nueva York: Prentice Hall.

- Gais, Thomas L., Mark A. Peterson y Jack L. Walker, Jr. (1991). Interest Groups, Iron Triangles, and Representative Institutions. En *Mobilizing Interest Groups in America*, editado por Jack L. Walker, Jr., pp. 123-140. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- González, Nancie L. (1969). *The Spanish Americans of New Mexico: A Distinctive Heritage of Pride*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Hardy-Fanta, Carol. (1993). *Latina Politics, Latino Politics*. Filadelfia: Temple University Press.
- Hero, Rodney E. (1992a). *Latinos and the U.S. Political System: Two-Tiered Pluralism*. Filadelfia: Temple University Press.
- Hero, Rodney E. (1992b). Latinos and the 1988 Election: Arizona. En *From Rhetoric to Reality: Latinos in the 1988 Election*, editado por Rodolfo O. de La Garza, Rodolfo O., y Louis DeSipio, pp. 77-83. Boulder, CO: Westview Press.
- Heinz, John P., Edward O. Laumann, Robert L. Nelson y Robert H. Salisbury. (1993). *The Hollow Core*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Institute for Puerto Rican Policy. (1993). *The Plebiscite and the Diaspora: Policy Forum Proceedings*, editado por Gordon Jonathan Lewis. Nueva York: IPRP.
- Jennings, James, y Monte Rivera, eds. (1984). *Puerto Rican Politics in Urban America*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Jones, Bryan D., y Lynn W. Bachelor. (1993). *The Sustaining Hand: Community Leadership and Corporate Power*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.
- Kihss, Peter. (1954). Puerto Rico Head Calls It "Lunacy". *The New York Times*, 2 de marzo.
- López, Alfredo. (1973). *The Puerto Rican Papers*. Nueva York: Bobbs-Merrill.
- Meléndez, Edwin, y Edgardo Meléndez. (1993). Introduction. En *Colonial Dilemma*, editado por Edwin Meléndez y Edgardo Meléndez, pp. 1-16. Boston: South End Press.
- Mollenkopf, John H. (1992). *A Phoenix in the Ashes: The Rise and Fall of the Koch Coalition in New York City Politics*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mollenkopf, John H. (1991). Political Inequality. En *Dual City: Restructuring New York*, editado por John Hull Mollenkopf y Manuel Castells, pp. 333-358. Nueva York: Russell Sage.
- Moore, Joan, y Harry Pachon. (1985). *Hispanics in the United States*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- NPRC Reports. (1990a). Equitable Grant Motivates NPRC's AIDS Initiative, and NPRC Testifies Before House Ways and Means Committee. Washington, D.C.: NPRC, 11: 1, enero-febrero.
- NPRC Reports. (1990b). NPRC Outlines Advocacy Program for Current Congressional Session. Washington, D.C.: NPRC, 10: 3, abril.
- NPRC Reports. (1990c). NPRC Calls for More Nutritional Assistance to Puerto

- Rico. Washington, D.C.: NPRC, 10: 4, mayo.
- NPRC Reports*. (1990d). Major Compromises Needed for Congress to Pass Housing Bill. Washington, D.C.: NPRC, 10: 8, octubre.
- NPRC Reports*. (1990e). CED Symposium Paves Way for an Emerging Puerto Rican Network, and Congress Funds Drop-out Prevention and Bilingual Programs. Washington, D.C.: NPRC, 10: 9, noviembre.
- NPRC Reports*. (1990f). Census Bureau Reports Drop in Puerto Rican Poverty Rates. Washington, D.C.: NPRC, 10: 6, julio/agosto.
- Pachon, Harry P. (1983). The Puerto Rican Voter Potential in the United States. National Puerto Rican Coalition. *Strategies for Increasing Voter Participation in Puerto Rican Communities in the Continental United States*. Alexandria, VA: NPRC. 18-29.
- Rivera-Batiz, Francisco L., y Santiago, Carlos. (1994). *Puerto Ricans in the United States: A Changing Reality*. Washington, D.C.: National Puerto Rican Coalition.
- Rogler, Lloyd. (1972). *Migrant in the City: The Life of a Puerto Rican Action Group*. Nueva York: Basic Books.
- Rosenstone, Steven J., y John Mark Hansen. (1993). *Mobilization, Participation, and Democracy in America*. Nueva York: Macmillan.
- Ryan, Gerald A. (1965). Need for Involvement in Community is Seen. *The Hartford Courant*, 20 de noviembre.
- Sánchez-Korrol, Virginia. (1983). *From Colonia to Community*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Scarborough, Elinor. (1984). *Political Ideology and Voting: An Exploratory Study*. Oxford: Clarendon Press.
- Schattschneider, E.E. (1960). *The Semi-Sovereign People*. Hinsdale, IL: The Dryden Press.
- Sierra, Christine Marie. (1992). Hispanos and the General Election in New Mexico. En *From Rhetoric to Reality: Latinos in the 1988 Election*, editado por Rodolfo O. de La Garza y Louis DeSipio, pp. 43-68. Boulder, CO: Westview Press.
- The Hartford Times*. (1969). Puerto Ricans to Parade Today. 28 de septiembre.
- The Hartford Times*. (1957). Puerto Rican Relations in Community Vary. 10 de mayo.
- The Hartford Times*. (1954). Local Puerto Ricans, Few in Number, Deplore Shootings. 3 de marzo.
- The New York Times*. (1954a). F.B.I. and Police Dig For Plot Roots Here. 3 de marzo.
- The New York Times*. (1954b). Assembly Condemns Shooting. 4 de marzo.
- The New York Times*. (1954c). Puerto Ricans Donate to Illinois Blood Bank. 4 de marzo.
- Verba, Sidney, y Nie, Norman H. (1972). *Participation in America*. Nueva York: Harper & Row.
- Wolfinger, Raymond E., y Steven J. Rosenstone. (1980). *Who Votes?* New Haven: Yale University Press.

## RESUMEN

Este artículo explora las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características básicas del desarrollo político puertorriqueño en los Estados Unidos? ¿Qué le promete a este grupo la representación política a través del proceso electoral? El artículo plantea que un esquema analítico enfocado en la desventaja económica y el prejuicio racial ofrece un punto de vista parcial e inadecuado para la comprensión de la experiencia política puertorriqueña en el continente. A través de los años los puertorriqueños en los Estados Unidos han ocupado el escenario político norteamericano enarbolando las banderas de la incorporación, el separatismo y la identidad étnica, buscando puntos de acceso desde los cuales satisfacer sus necesidades culturales, sociales y económicas. A pesar de la "guagua aérea" y la migración circular, los puertorriqueños han formado comunidades integradas y estables en la diáspora; y han demostrado un interés consistente en mejorar sus condiciones de vida a través de la participación política y la representación electoral. Aunque el proceso electoral desempeña un papel importante en la movilidad social, los puertorriqueños todavía no han logrado mejoras sustanciales en su posición socioeconómica. Esto parecería indicar que el proceso electoral ofrece una promesa fatua. No obstante, dicha conclusión no es inevitable, especialmente si se enfoca el problema desde el punto de vista del liderazgo y el contexto político y demográfico que aumenta las probabilidades de éxito. [**Palabras clave:** representación política, proceso electoral, separatismo, latinos en Estados Unidos.]

## ABSTRACT

This article explores the following questions: What are the basic characteristics of the political development of Puerto Ricans in the United States? What does political representation through the electoral process promise this group? The article argues that an analytic approach based on economic deprivation and racial prejudice provides a partial and inadequate perspective to understand the Puerto Rican political experience in the mainland. Through the years Puerto Ricans in the U.S. have occupied the American political stage upholding the banners of incorporation, separatism, and ethnic identity, searching for access points from which to satisfy their cultural, social, and economic needs. Despite the "airbus" and circular migration, Puerto Ricans have formed integrated and stable communities in the diaspora; and they have demonstrated a consistent interest in improving their living conditions through political participation and electoral representation. Although the electoral process plays an important role in social mobility, Puerto Ricans have not yet been able to make substantial gains in their socioeconomic position. This trend would seem to indicate that the electoral process offers a false hope. However, such a conclusion is not inevitable, especially if the problem is approached from the point of view of the leadership and the political and demographic context that could increase the probabilities of success. [**Keywords:** political representation, electoral process, separatism, Latinos in the U.S.]